

2022

BIDeconomics

Panorama de oportunidades

CHILE

Autor:
Sebastián Miller

Editor:
Andrés Gómez Osorio





Contenido

CHILE EN GRÁFICOS	3
INTRODUCCIÓN	
Líderes, no a pesar de los cambios, sino gracias a ellos	4
RECOMENDACIONES	10
VIDA DIGNA	11
Igualdad de oportunidades: Pobreza, formación para el trabajo, vivienda y seguridad	12
BAJO LA LUPA EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD	15
Protección social: Pensiones, salud y cuidado de personas dependientes	19
BAJO LA LUPA CAMBIO CLIMÁTICO	21
SOCIEDAD PRÓSPERA Y MODERNA	25
Matriz productiva: Innovación, pymes, turismo, agricultura y sectores emergentes	26
La infraestructura es el medio, producir es el fin: Transporte de carga y facilitación comercial	29
Mejoras en la administración pública: Gobernanza, descentralización y entorno regulatorio	31
BAJO LA LUPA DIGITALIZACIÓN	33

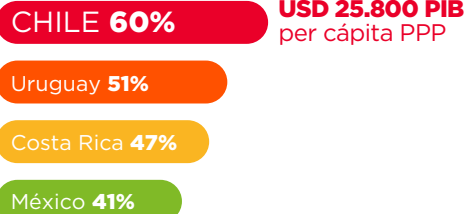
Chile en gráficos



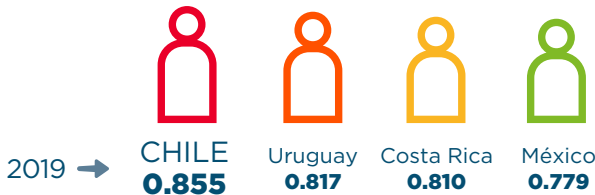
El de mayor ingreso en la región...

PIB per cápita como porcentaje del promedio en la OCDE

2021

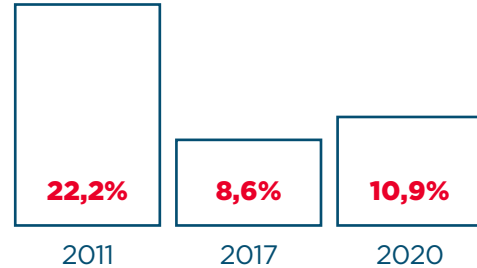


y el mejor índice de Desarrollo Humano



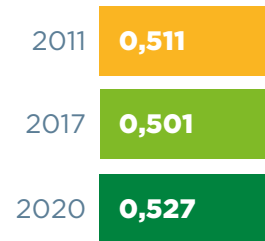
Estrategia de superación de la pobreza iba bien, pero demostró fragilidad en pandemia

% de pobreza

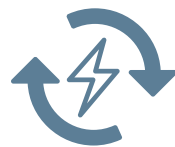
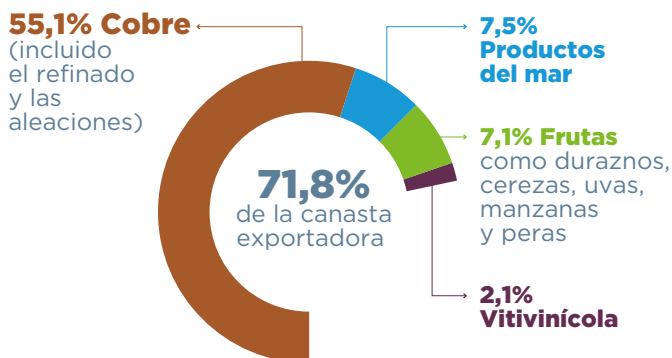


Desigualdad, el peor índice en 15 años

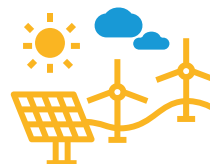
Coefficiente de Gini



Más del 70% de la canasta exportadora depende de recursos naturales



Energías renovables toman la delantera



Solar y eólica
2013 **0%**
2022 **29%**

Generación del sistema eléctrico



Carbón
2013 **46%**
2022 **27%**



INTRODUCCIÓN

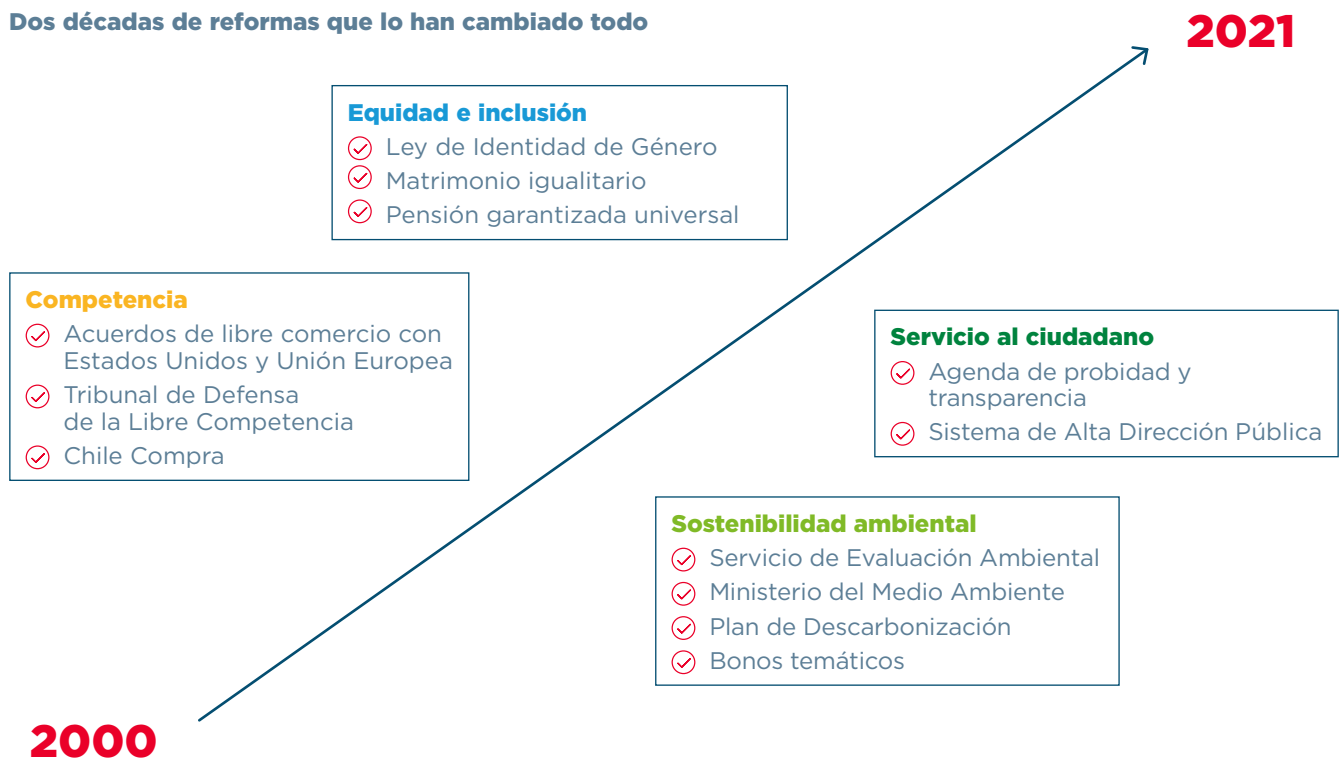
Líderes, no a pesar de los cambios, sino gracias a ellos

Chile es un referente para América Latina y el Caribe. El país, que en los años 80 era de ingresos bajos, se convirtió en el de mayor ingreso per cápita en la región y el de mejor Índice de Desarrollo Humano, muy cerca del promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su tasa de pobreza se ha reducido de manera extraordinaria durante los últimos 35 años, pues lograron que menos del 3% de las personas tuvieran ingresos diarios de hasta 3,1 dólares. Además, **es el país de la región que más avances ha hecho en Objetivos de Desarrollo Sostenible y el número 31 del mundo.** Lo que

para muchos sigue siendo una aspiración, para los chilenos es una realidad: son un país en el umbral de desarrollo, aún cuando persisten desafíos.

Sin desconocer que las protestas de 2019 llevaron a momentos difíciles, de la crisis surgió una oportunidad para realizar nuevas e importantes transformaciones. Afortunadamente, **Chile tiene experiencia al respecto: un historial de reformas, profundas y relevantes, emprendidas entre 2000 y 2021.** Si hoy son líderes regionales es gracias a esas iniciativas de cambio —y no «a pesar» de ellas—, en términos económicos, de gobernanza, sociales y ambientales.

Dos décadas de reformas que lo han cambiado todo





En lo económico, el robusto crecimiento del país no solo ha sido posible por la estabilidad fiscal y la apertura comercial, sino también por la creación de marcos normativos necesarios para corregir fallas del mercado, especialmente, en materia de competencia justa y protección del consumidor. En cuanto a gobernanza, la calidad de las instituciones no está lejos del promedio de los países de la OCDE. Eso se debe a que **han tomado medidas efectivas para evitar la corrupción, aumentar la transparencia del Estado y mejorar los sistemas político y judicial.**

En el ámbito social, la reforma progresiva al sistema tributario de 2014 ayudó a dar un salto positivo en la desigualdad de ingresos, estancada durante casi una década: cayó a 48,2 en 2015 (9,5 puntos menos que en el año 2000). También es positivo el balance de las reformas ambientales. El marco de conservación del patrimonio natural, que existía desde 1994, fue rediseñado a partir de 2010 con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.

No obstante, el crecimiento se ha estancado. Si bien el PIB aumentó un promedio anual de 3,8% entre 2000 y 2019, apenas creció 2% en los últimos cuatro años de ese mismo periodo. **El coronavirus, además, dejó en evidencia las vulnerabilidades** de muchos hogares que tuvieron que buscar fuentes de ingreso en el mercado ambulante. **La pobreza, por primera vez en décadas, aumentó y se ubicó en 10,8%.**

Pasado el momento más crítico de la pandemia, es tiempo de retomar la senda. En el BID pusimos en práctica un modelo para calcular los años que tardaría Chile en cerrar varias de sus brechas, en caso de continuar como lo ha venido haciendo durante la última década. En materia de pobreza le tomaría 27 años alcanzar los indicadores de un país modelo (y en solo 10 años se asemejaría a Australia). Los mismos 27 años demoraría el sector financiero en cerrar sus brechas (y en una década se parecería a Austria). Un poco más lejos están los desafíos de género (31 años), protección social y trabajo (34) y salud (35). Los mayores retos se encuentran en las áreas de infraestructura (casi 91 años para cerrar las brechas actuales), medio ambiente (116 años) y deuda y política económica (228).

Este documento plantea recomendaciones puntuales para que Chile crezca de manera sostenible y con equidad. Hemos dividido dichas recomendaciones en dos grandes propósitos: **vida digna** y, por otro lado, **sociedad próspera y moderna.**



VIDA DIGNA

Aquí agrupamos los esfuerzos que pueden ser determinantes para que los chilenos alcancen condiciones mínimas de bienestar en diferentes frentes.



La **igualdad de oportunidades**, por ejemplo, es un anhelo posible si los más vulnerables superan la pobreza, si la educación conduce a empleos de calidad, si las personas acceden a viviendas con servicios urbanos e, incluso, si se garantizan unos mínimos de seguridad y convivencia para todos.

En Chile la educación es casi universal, pero hay deficiencias en preescolar. Solo el 54% de niños de tres años asiste a la preprimaria. En las pruebas PISA, con respecto al promedio de la OCDE, los alumnos obtienen un 15% menos de puntaje en matemáticas y un 8% menos en lenguaje. También son un reto las habilidades técnicas y socioemocionales de la fuerza laboral. Se estima que más de la mitad de la población adulta no tiene conocimientos básicos (lo que se conoce como «analfabetismo funcional»).

Existen, además, brechas de desigualdad urbana. Las personas que viven en la periferia de las ciudades cuentan con acceso precario a bienes públicos como parques y sistemas de transporte eficientes. Pueden demorar hasta dos horas en llegar a sus trabajos, en contraste con los 30 minutos que les toma a quienes viven en comunas céntricas. Los servicios básicos y equipamientos también son de menor calidad y cobertura en los barrios de la periferia.

En seguridad, es posible mejorar la relación de la ciudadanía con la policía, pese a que la confianza de los chilenos hacia los carabineros cayó de un máximo de 65%, en 2009, a 30% en 2020. El sistema penitenciario también puede reformularse. El costo anual de la administración carcelaria y los ingresos que pierden las personas privadas de libertad, sumados, superan la inversión nacional en investigación y desarrollo. Aún así, el porcentaje de reincidencia es alto. Tratar el



abuso de drogas, como factor de riesgo de violencia, es importante. La edad de inicio de consumo en la población escolar bordea los 14 años.



Un asunto transversal es la **equidad de género y la diversidad**, que contempla a inmigrantes y pueblos indígenas, grupos con acceso limitado a educación, salud y empleo, lo que obstaculiza sus contribuciones a la sociedad.



La **protección social** es otro frente que aporta a la vida digna. Es clave la sostenibilidad del régimen pensional y del sistema de salud, como instrumentos para preservar la integridad de las personas hasta edades avanzadas.

La expectativa de vida en Chile es de 79,1 años (en la OCDE es de 80,6). Sin embargo, la mortalidad por enfermedades crónicas aumentó en las últimas tres décadas: este tipo de decesos (también conocidos como «no transmisibles») pasaron de representar el 73% de todas las muertes en 1990 al 86% en 2019. Según el Observatorio del Envejecimiento, es el país de la región con mayor prevalencia de tabaquismo y uno de los que registra más consumo de alcohol y casos de obesidad. El 86,7% de la población es sedentaria. La buena noticia es que casi el 10% de las hospitalizaciones se podrían evitar con un manejo oportuno de las patologías crónicas en la atención primaria. Otro desafío son las largas listas de espera para acceder a procedimientos especializados, pese a que el 40% de los casos son de baja complejidad.

Entre tanto, Chile pasa por un periodo de envejecimiento acelerado. En 2010 había 13 ancianos dependientes por cada 100 trabajadores. En 2020 aumentó a 17,5 por cada 100. Se prevé que, en 2050, dicha tasa se duplique y llegue a 36. De mantenerse las cosas así, el gasto del sistema pasaría de 5 a 15% del PIB.



Otro desafío transversal, asociado a la vida digna, es el **cambio climático**. Chile es uno de los 30 países que presentará mayor riesgo hídrico en 2025. En la última década sufrió una mega sequía —la peor en 60 años— y la disponibilidad del agua, en solo cinco años, se redujo un 37%. La erosión y la desertificación afectan a la mitad del país y al 75% del suelo productivo como resultado de la deforestación, el pastoreo excesivo y las prácticas agrícolas insostenibles.

**Vivir más,
pero con mejor salud**

79,1 años

es la expectativa de vida en Chile

Cerca al promedio de la OCDE:
80,6 años

Sin embargo...

Mortalidad por enfermedades crónicas aumentó: pasaron de representar el 73% de todas las muertes, en 1990, al 86%, en 2019.

86,7%

de la población **es sedentaria.**



Chile es el país de la región con **mayor prevalencia de tabaquismo** y uno de los que registra **más consumo de alcohol y casos de obesidad**

Casi 10%

de las hospitalizaciones se podrían evitar con un manejo oportuno de patologías crónicas en atención primaria



SOCIEDAD PRÓSPERA Y MODERNA

Este segundo propósito requiere de condiciones que habiliten la economía del mañana.



Transformar la **matriz productiva**, por ejemplo, es posible si se enfatiza en innovación, agricultura, turismo, pymes y el despegue de sectores emergentes.

Los recursos que el país destina a investigación y desarrollo son reducidos. El sector privado no dedica los esfuerzos necesarios, en parte, por falta de incentivos. Las empresas chilenas suelen desarrollar actividades de innovación, principalmente, para atender y cumplir con normas y estándares. En consecuencia, son pocas las compañías que hacen innovaciones relevantes.

Las pymes podrían beneficiarse de mayor acceso a la banca. Aún cuando el sistema financiero de Chile es el más profundo y sofisticado de la región, solo el 19% de los créditos comerciales son destinados a este tipo de empresas, menos que en países como Colombia y Perú (24% en ambos casos) y Brasil (40%). En la OCDE el promedio es de 47%

Un sector prometedor es el de agricultura, caza y pesca, en donde más del 10% de las empresas exportan. La proporción podría ser mayor si innovan, considerando que menos del 14% de los productores agrícolas lo hace. El turismo, por su parte, está en mora de recuperarse tras la pandemia. De casi un millón de empleos que generó en 2019, pasó a 719 mil en 2020 (se redujo 26%). La Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 señala, entre otros temas, que la oferta es poco diversificada pese al potencial de los territorios chilenos.

En cuanto al despegue de sectores emergentes, es clave el hidrógeno verde. Chile podría producir 160 millones de toneladas anuales y exportar la gran mayoría, teniendo en cuenta que la demanda doméstica de este combustible es hoy menor a 60 mil toneladas. Mejor aún, la producción de hidrógeno

Modernizar lo que existe y adelantarse al futuro de las energías limpias



Menos del 14%
de los productores agrícolas innova

Turismo, en mora de recuperarse tras pandemia

2019: **980 mil empleos (11% del total)**
2020: **719 mil empleos**



160 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde podría producir Chile con energías renovables no convencionales

Tercer país de la región con **mayor capacidad instalada de energía solar**

Cuarto en energía eólica



verde podría hacerse a través de energías renovables no convencionales. El país ha avanzado de manera significativa en esta materia, al ser el tercero de la región con mayor capacidad instalada de energía solar y el cuarto de energía eólica.



El transporte de carga es otro sector que suma al propósito de una sociedad más próspera y moderna. **Si la infraestructura es el medio, exportar es el fin.** Para ello es clave invertir en conectividad. La participación ferroviaria en carga

es baja y solo una cuarta parte de la red vial está pavimentada. El rendimiento logístico de los puertos supera el promedio regional, pero puede mejorar para alcanzar a la OCDE. Lo mismo ocurre con los costos de comercio exterior.



Es relevante hacer **mejoras en la administración pública.** Aunque en Chile han sido pioneros en esta área, el liderazgo de diversos procesos se diluye en múltiples instituciones. Puntualmente, la consolidación de una política

regulatoria se dispersa en varias entidades. La tarea es urgente si se tiene en cuenta que en Chile hay más de 300 mil normas, entre leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones administrativas.

El proceso de descentralización política y fiscal, que ya inició, es una buena noticia para trasladar nuevas competencias a los gobiernos regionales. Cerca del 14,5% del gasto es realizado por los gobiernos subnacionales, cuando el promedio de la OCDE es de casi el doble (27,4%).



La **digitalización** es un tema transversal para la gobernanza y los servicios en línea. Menos de la mitad de los casi 3.200 trámites están totalmente digitalizados. Las 270 millones de transacciones anuales equivalen a 20 por adulto, cuando

el promedio de América Latina y el Caribe es de 5. Además, un estudio del BID señaló que, durante la pandemia, el 40% de los funcionarios consultados no pudo realizar alguna tarea crítica, en parte porque el 21% de ellos no tuvo acceso remoto a sus archivos y aplicaciones de la oficina y apenas un 36% tenía una computadora portátil provista por su organización. En materia de conectividad, han tenido una política ambiciosa, pero el internet de banda ancha aún no llega a varias zonas rurales y poblaciones vulnerables.

CHILE PUEDE

Hay una frase trillada que no por trillada deja de ser real: los desafíos, cuando se trabaja en ellos, pueden convertirse en oportunidades. Con eso en mente, Chile está llamado a profundizar sus logros y a seguir siendo un referente para América Latina y el Caribe. Sus esfuerzos son vistos con ilusión, porque demuestran que el progreso es posible.

La historia reciente indica que cuentan con la experiencia y la institucionalidad necesarias para adelantar procesos de cambio. Son, de hecho, líderes regionales porque han sabido gestionar transformaciones en distintos frentes y coyunturas. Con semejante trayectoria, las reformas por venir no tienen que ser motivo de incertidumbre, sino fuente de oportunidades para seguir dando saltos significativos hacia adelante.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las áreas donde existen las mayores oportunidades, y con el propósito de hacerlas realidad, planteamos a continuación una serie de acciones para que Chile avance en las transformaciones que necesita, con énfasis en estos dos frentes:



Vida digna



**Sociedad próspera
y moderna**



VIDA DIGNA

Chile puede proponerse el acceso a unos mínimos de bienestar más allá de los servicios esenciales.

Se trata de vivir con igualdad de oportunidades —educativas, laborales y de vivienda—, en una sociedad que promueva la equidad de género y la diversidad, además de la salud, una pensión para la vejez y un territorio en donde el cambio climático no amenace la existencia.



IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Para cerrar brechas de inequidad, algunos de los desafíos más próximos son retomar la senda de superación de la pobreza, brindar formación que conduzca a empleos de calidad, promover viviendas con bienes urbanos y propiciar un mejor ambiente de seguridad y convivencia.



INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD ECONÓMICA CONTRA LA POBREZA

Evaluar el desempeño del Registro Social de Hogares es necesario para mejorar los criterios de selección de beneficiarios y asignar las ayudas con mayor pertinencia.

Realizar estimaciones ágiles sobre el costo fiscal de medidas de protección de ingresos —para los más vulnerables— facilitaría el proceso deliberativo que acompaña este tipo de políticas. Una herramienta basada en analítica de datos, además de hacer dichas estimaciones, puede determinar de manera expedita montos y coberturas de las transferencias. Esto alentaría la eficiencia del gasto y la velocidad de respuesta de las autoridades.

Diseñar un plan para contener la caída de los ingresos durante periodos de emergencia —como el causado por la pandemia— es posible si se identifican hogares y personas que puedan desempeñar empleos temporales (especialmente, trabajos que se requieren para atender las emergencias). Con los sistemas de información existentes —del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la red de protección social desplegada a nivel municipal— sería posible elaborar estrategias que complementen las transferencias.

Construir un modelo que reconozca las necesidades de los hogares, más allá del indicador de pobreza por ingresos, permitiría diseñar soluciones integrales para afrontar las consecuencias del coronavirus. Los datos de la Encuesta Social COVID-19 muestran que un 20% de las familias han sufrido seis o más efectos negativos de manera simultánea, como endeudamiento, gasto de ahorros, venta de activos, menor consumo alimentario o postergación de compromisos de salud.



EDUCACIÓN QUE LLEVE A EMPLEOS FORMALES

Profundizar la educación híbrida —que combine lo mejor de la enseñanza virtual y la presencial— requiere fortalecer las condiciones de infraestructura y seguridad sanitaria en las aulas. Es indispensable desarrollar programas que mejoren el acceso de los hogares al equipamiento necesario para la educación virtual, además de ofrecer recursos y «software» educativo a los docentes para que sus modelos híbridos sean pedagógicamente potentes.

Producir evidencia sobre el desarrollo de habilidades pertinentes para la vida permitiría guiar mejores decisiones —individuales y de política pública— en materia de formación y empleo. Con presupuesto y recursos humanos apropiados, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo podrían generar reportes con miradas multisectoriales y territoriales, así como con perspectiva de género y diversidad.

Impulsar un programa nacional de reconversión laboral, formación y capacitación para sectores clave permitiría articular a distintos actores, programas y políticas públicas. Serviría para conectar las necesidades de las empresas, las habilidades requeridas y los contenidos de los cursos.

**Crear mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento que involucren al sector privado, para diseñar programas de desarrollo de habilidades, incrementaría la eficiencia, efectividad y cobertura de estos programas.*

Potenciar programas de formación de capital humano como los «Finishing Schools», que tienen un enfoque en el sector de servicios globales, permitiría suplir la demanda de un recurso humano que es requerido por sus habilidades blandas y manejo de inglés empresarial.



VIVIENDAS FORMALES Y CON CALIDAD URBANA PARA LOS MÁS VULNERABLES

Robustecer el Banco de Suelo Público, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el traspaso de terrenos fiscales y la compra directa de terrenos privados, aumentaría la oferta disponible para la ejecución de proyectos de vivienda subsidiada. Se debe contemplar el uso de áreas centrales cuyos indicadores de calidad urbana y bienestar territorial promuevan una integración efectiva.

Implementar el arriendo protegido —subsidiado por el Estado— permitiría atender y priorizar grupos vulnerables, teniendo en cuenta género, raza, grupos etarios, estado civil, orientación sexual y condición migratoria.



Mejorar las capacidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es clave para asumir la emergencia derivada de los asentamientos informales. Se requiere gestión administrativa eficiente y obras, para lo cual es necesaria la coordinación entre secretarías ministeriales, servicios regionales, gobiernos regionales y municipios. Es importante la priorización estratégica de los campamentos a intervenir, incorporando criterios de riesgo ambiental y social.

**Cuando los campamentos deben relocalizarse es fundamental ofrecer soluciones transitorias de ubicación, con apoyo psicosocial.*



SEGURIDAD, RESOCIALIZACIÓN Y PREVENCIÓN

Fortalecer programas integrales de prevención social de la violencia, como el que lidera la Subsecretaría de Prevención del Delito, mejoraría las acciones focalizadas en poblaciones vulnerables, como son jóvenes y mujeres. Se deben minimizar sus factores de riesgo y darles habilidades socioemocionales.

Modernizar y reformar Carabineros y la Policía de Investigaciones es una oportunidad para abordar los delitos con nuevos enfoques y herramientas, es decir, con metodologías basadas en evidencia y resolución de problemas, tecnologías informáticas y estrategias de «Business Intelligence».

Desarrollar un nuevo modelo de reinserción en el sistema penitenciario permitiría avanzar hacia la efectiva resocialización de jóvenes y adultos. Se pueden realizar intervenciones basadas en evidencia y en las necesidades de las personas. Es importante capacitar al talento humano penitenciario en derechos humanos y principios de intervención penal efectiva.

Avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030 facilitaría el diseño de programas especializados para el tratamiento del consumo temprano de alcohol y drogas entre niños, niñas y adolescentes. Es clave que dichos programas cuenten con sistemas robustos para el monitoreo, medición y evaluación de los tratamientos.



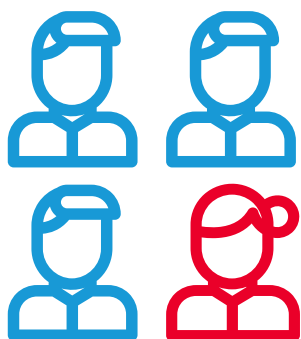
Bajo LA LUPA

EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Generar oportunidades de las que hoy siguen careciendo las mujeres, en ámbitos educativos y laborales, es un propósito realizable. En el camino hacia la igualdad, es imprescindible que los hombres pongan de su parte. Uno de los mayores retos está en la atención de los pueblos indígenas, la comunidad LGBTQ+, las personas con discapacidad y los migrantes.



Urge trabajar en la inclusión para promover el desarrollo



Solo

1 de cada 4

matrículas educativas en áreas STEM* corresponden a mujeres (2018)

*Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés.



Hombres ganan

28% más

(2019)

1.226 casos

y denuncias por homofobia y transfobia se reportaron en 2020

Aumentó

14,7%

con respecto a 2019

(Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género)





MUJERES EN EL MERCADO LABORAL

Promover la participación de mujeres en los negocios requiere de políticas específicas que profundicen su inclusión financiera. Se pueden impulsar herramientas como los bonos sociales de género y respaldar iniciativas para emprendedoras como el Programa Women Entrepreneurship Banking (WeB) y Women Entrepreneurs Finance (We-Fi), que habilitan productos y servicios financieros, además de conexiones y acceso a mercados. También se puede incentivar la participación de empresas de mujeres en las compras públicas.

**Son clave los programas de alfabetización digital y competencias blandas, como la iniciativa Emprender Conectadas —liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el BID—.*

Dar continuidad a la Iniciativa de Paridad de Género, alianza público-privada impulsada desde 2016 por el BID y el WEF (Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés), alentaría que más mujeres se integren a la fuerza laboral, ocupen puestos de liderazgo y se cierre la brecha salarial de género.

Monitorear la implementación de la normativa para el teletrabajo y el trabajo flexible contribuiría a proteger los derechos de las trabajadoras, promoviendo horarios que se puedan ajustar y el balance entre la familia y el trabajo.



FORMACIÓN SIN SESGOS DE GÉNERO

Elaborar políticas que fomenten la participación de mujeres en áreas STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) implica eliminar estereotipos con los que se valoran las capacidades según el género. Esto incluye analizar textos escolares que contengan dichos estereotipos y capacitar a los docentes para revertir sesgos inconscientes.

Consolidar un sistema de formación técnico-profesional, a cargo del SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), contribuiría a que más mujeres adquieran las competencias requeridas para integrarse a la economía digital. La oferta debe alentar su participación en oficios no tradicionales vinculados a áreas STEM, los que les permitiría acceder a mejores empleos y salarios.



HOMBRES PUEDEN Y DEBEN SER PARTE DE LA SOLUCIÓN

Aprobar el proyecto de ley de sala cuna universal, para madres y padres que trabajan, fomentaría el cuidado compartido de los hijos. También ayudaría la promoción del permiso paternal (que hoy es de cinco días para los hombres) y la modificación de la ley para que los padres tengan derecho a su propio permiso post-natal (del que hoy solo pueden disponer si la madre les transfiere algunas de sus semanas de descanso).

Fomentar programas que inculquen masculinidades positivas contribuiría a prevenir la violencia de género. Deben modificarse los patrones culturales que, desde temprana edad, naturalizan la violencia contra la mujer. Es importante organizar actividades de prevención con hombres jóvenes y alentar iniciativas como el [Programa P](#) y la campaña «Somos diferentes, somos iguales», útiles para reducir la violencia de género, prevenir que los niños se expongan a ella y evitar su transmisión intergeneracional.

Involucrar a los hombres en programas de salud sexual y reproductiva aporta a la toma de decisiones compartida entre las mujeres y sus parejas. Así se incentivan conductas más responsables y conscientes, desde la decisión de cuántas hijas o hijos tener, hasta su corresponsabilidad en la crianza.



DIVERSIDAD SOCIAL, EL RETO DE NIVELAR LA CANCHA PARA LAS MINORÍAS

Reformar la educación y la salud debe incluir mejoras para los pueblos indígenas, personas LGBTQ+ y personas con discapacidad. Urge adaptar los servicios a las necesidades diferenciadas de estos grupos. En algunos casos, los programas deben adecuarse a determinados contextos culturales.

**En educación, es prioritario desarrollar estrategias de reingreso para los estudiantes de estas poblaciones que desertaron durante la pandemia.*

Fomentar la inclusión laboral de la población migrante es posible con mecanismos focalizados que habiliten sus actividades profesionales, desde la convalidación de títulos educativos —para facilitar que accedan a empleos pertinentes— hasta financiamiento y asesoría para sus emprendimientos.

Actualizar la caracterización de los migrantes en el país permitiría disponer de datos para un mejor diagnóstico de la situación y tomar medidas adecuadas. Podrían aprovecharse lecciones regionales, como la «Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el País» realizada en Perú, en 2018, para conocer más sobre los migrantes en asuntos de salud, educación, empleo, discriminación, género y victimización. Para esto, Chile cuenta con herramientas estadísticas como la Encuesta CASEN.



PROTECCIÓN SOCIAL

El bienestar de los chilenos, hasta su vejez, es un anhelo que se puede materializar en términos de pensiones, salud y cuidado de personas dependientes.



PENSIONES, LA TAREA POSIBLE

Reformar el sistema pensional podría fortalecer su legitimidad y permitiría repensar la relación entre aportes solidarios y contributivos, toda vez que los ahorros de millones de afiliados hoy son bajos o casi nulos. El nuevo modelo debe contemplar tendencias de envejecimiento acelerado y evaluar la creación de instituciones independientes que ajusten el sistema periódicamente.

Articular convenios internacionales de seguridad social con Venezuela, Haití y Bolivia permitiría avalar derechos de trabajadores migrantes de estos países. Se habilitarían sus pensiones de vejez, retiro o incapacidad, respetando la antigüedad laboral —como hoy ocurre gracias a los convenios bilaterales establecidos con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay—.



MÁS SALUD, MENOS ESPERAS

Reforzar el análisis de datos en el Ministerio de Salud contribuiría a una mejor gestión de los centros hospitalarios en el manejo de listas de espera, para que más personas accedan a procedimientos especializados. El BID ha apoyado la adopción de una estrategia contingente, para revertir la crisis ocasionada por las listas de espera, con inteligencia sanitaria y analítica de datos.

**El BID implementó un piloto en 2020 en el Hospital Padre Hurtado del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de Santiago. Allí se redujo en 67% la lista de espera de gastroenterología y el modelo usado se está replicando.*

Diseñar un plan maestro que mejore las capacidades de respuesta de dispositivos no hospitalarios permitiría realizar más cirugías ambulatorias. Esto ayudaría a descongestionar la demanda de procedimientos en hospitales, cuando se trata de intervenciones de menor complejidad.



Reforzar la asistencia remota aliviaría la demanda de consultas médicas presenciales y es una oportunidad para atender de manera preventiva enfermedades crónicas. Es necesario mejorar los protocolos para las citas virtuales, en materia de conectividad y entrenamiento al personal de salud.

**Una iniciativa apoyada por el BID mostró los beneficios de incorporar triaje digital y teleconsulta, disminuyendo concurrencias y tiempos de espera.*

Abordar de manera proactiva las patologías de mayor prevalencia en la población es posible si se enfatiza en prevención de factores de riesgo y en detecciones tempranas. Dichas patologías —que suman de manera notable a la tasa de muertes por enfermedad— tienen origen en hábitos y estilos de vida que pueden corregirse. Se debe insistir en estrategias que desalienten conductas como el tabaquismo, el consumo de alcohol y el sedentarismo.



CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES

Extender el alcance del Sistema Nacional de Cuidados es factible si se implementa un esquema de pagos flexibles. Existe en el mundo una figura denominada «*cash for care*», en la que el Estado transfiere dinero a la persona dependiente para que ella pague directamente por sus servicios de cuidado. Esta estrategia tiene un componente de género, pues muchas mujeres, que hoy cuidan de sus familiares, podrían integrarse al mercado laboral.

**Para determinar la conveniencia y costo fiscal de esta medida, debe hacerse el respectivo estudio en el contexto chileno e implementar un piloto.*

Certificar el desarrollo de competencias en los servicios de cuidado ayudaría a actualizar y profesionalizar el sistema, aportando a su modernización y a la sofisticación del sector, en beneficio de los dependientes y sus familias.



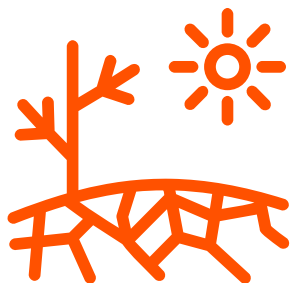
Bajo LA LUPA

CAMBIO CLIMÁTICO

Se han sentado bases para enfrentar desafíos de eficiencia hídrica, conservación de patrimonio verde, uso de energía geotérmica y resiliencia ante fenómenos ambientales. **En todos estos aspectos es momento de pasar al siguiente nivel.**

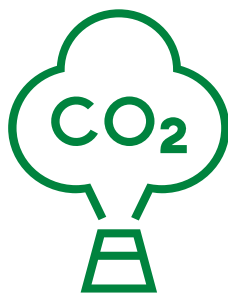


Razones para alcanzar la carbono-neutralidad en 2050



76%

de la superficie chilena está **afectada por la sequía y los suelos degradados**



Las emisiones anuales per cápita son de

4,8 toneladas métricas...



pero Chile apenas aporta el 0,24% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial



Megasequía desde 2006

En todos los años recientes ha caído menos agua que el

promedio anual entre 1980 y 2010



EFICIENCIA EN EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA

Invertir en tecnología y en soluciones innovadoras permitiría mejorar la gestión de los recursos hídricos, principalmente, en el sector agrícola, que es uno de los mayores consumidores de agua. El sector privado debe sumarse a este propósito. La digitalización habilitaría procesos de automatización, además de recolección y análisis de datos, lo que contribuiría a racionalizar el consumo.

Modernizar el marco que regula la administración del agua exige una nueva institucionalidad que ayude a coordinar las múltiples competencias estatales.

Diferentes entidades deben articularse para hacer la debida planificación, protección y fiscalización de los recursos hídricos. Es importante desarrollar mecanismos técnicos de resolución de conflictos, haciendo compatibles el ejercicio de los derechos constituidos sobre el agua y el interés público.

**Una política hídrica integral requiere medidas que van desde la pedagogía en edades tempranas, hasta aspectos tarifarios e, incluso, clasificación de equipos, tecnologías y maquinarias según su eficiencia hídrica.*

Impulsar esquemas innovadores de financiación en el sector de agua y saneamiento permitiría aumentar los recursos disponibles y destinar parte de ellos a la resiliencia climática. Algunos mecanismos a considerar son el financiamiento mixto, los fondos de agua, las soluciones basadas en la naturaleza, la financiación basada en resultados y los bonos temáticos.



CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL

Crear una agencia de áreas protegidas ayudaría a la gobernanza de estos territorios y a cumplir con lo dispuesto por el SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado). Toda vez que el 80% de la superficie de Chile corresponde a propiedades privadas, el país se beneficiaría de tener políticas de promoción de áreas protegidas privadas.

Reforzar los planes de gestión para las áreas marinas protegidas contribuiría al cuidado de la biodiversidad y a mejorar el rendimiento de las pesquerías. Así se podrían desarrollar más estrategias eficaces de pesca sostenible que, a su vez, resguarden las fuentes de ingresos de las comunidades pesqueras.



ENERGÍAS RENOVABLES

Profundizar el uso de energía geotérmica es posible con esquemas financieros que mitiguen el riesgo de exploración. Aprobar la ley sobre concesiones de energía geotérmica facilitaría la implementación de proyectos piloto y de economías de escala para reducir costos. Beneficiaría tanto a las ciudades, por la calefacción en los edificios, como a los productores en el campo, por la utilización de esta energía en procesos agrícolas. Es costo-eficiente e impacta positivamente la salud de los chilenos frente a la quema de leña —que sigue siendo ampliamente utilizada y es más contaminante—.

**La geotermia ya se ha utilizado con éxito en invernaderos de flores, secado de granos, deshidratación de fruta, pasteurización de la leche y hasta en la construcción de refugios de ganado para protegerlo frente a las heladas.*

***Según la Agencia de Sostenibilidad Energética, la agroindustria podría reducir su factura de energía eléctrica hasta en un 50%.*

PAÍS RESILIENTE

Profundizar la ejecución de políticas y normativas hoy vigentes en materia de capital natural, además de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, reforzaría la institucionalidad necesaria en estos temas. Se trata de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la Ley de Humedales Urbanos, el decreto de techos verdes y la Estrategia Climática de Largo Plazo.



Establecer un observatorio de vulnerabilidad al cambio climático serviría para mejorar el nivel de respuesta, según las particularidades de cada territorio. Esto requiere incluir en el Registro Social de Hogares información socioambiental por zonas, de manera que se pueda ajustar la vulnerabilidad de las familias, de acuerdo a su lugar de residencia.

Crear un fondo permanente de asistencia a poblaciones habilitaría recursos para enfrentar crisis provocadas por emergencias. Es importante analizar alternativas de financiamiento de largo plazo, para rehabilitar y reconstruir, más allá de las acciones de reacción y atención inmediata.

Adaptar en las ciudades el iGOPP (Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres) permitiría que los gobiernos subnacionales usen esta herramienta. Sirve para diagnosticar, monitorear, evaluar y hacer reportes de gobernanza local en riesgo de desastres.

**Desde el Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID se tiene previsto apoyar esta adaptación del iGOPP.*



SOCIEDAD PRÓSPERA Y MODERNA

El bienestar de los pueblos exige transformaciones que se anticipen al futuro. Chile tiene la experiencia y la visión para entender que debe sofisticar su matriz productiva y su infraestructura de transporte con ánimo exportador. Avanzar en mejoras a la administración pública y en digitalización también son retos próximos por asumir.



MATRIZ PRODUCTIVA

Progresar requiere apostar por las pymes y sectores ya conocidos, como el turístico y el agrícola, pero también por industrias emergentes que prometen grandes réditos, como el hidrógeno verde. En cualquiera de los dos casos —sectores nuevos o tradicionales— innovar es un deber.



INNOVACIÓN, CLAVE EN EL CRECIMIENTO

Generar condiciones para la innovación empresarial es posible si se apoya la investigación científica, especialmente, aquella que se hace en alianza entre la academia y el sector privado. Ayudaría desarrollar mecanismos de financiamiento temprano para empresas de base científico-tecnológica. Además, es relevante brindarles a las pymes formación en estrategia empresarial, modelos de negocio y nuevas prácticas productivas.

Fortalecer la institucionalidad que respalda las actividades de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento) contribuiría a la coordinación estatal. Es importante que dicha institucionalidad promueva mayor participación de las mujeres en toda la cadena de innovación.

Aumentar los incentivos para que el sector privado innove fomentaría el uso de tecnologías y nuevos modelos que, a la postre, impacten la productividad. Se puede alentar la competencia entre empresas que, interesadas en los incentivos, construyan propuestas novedosas de alto valor.



BANCARIZACIÓN DE PYMES

Impulsar la inclusión financiera es clave para que las pymes accedan a servicios bancarios. Se puede acudir a incentivos que faciliten el cierre de brechas en pequeñas y medianas empresas y, particularmente, en mujeres emprendedoras. Es importante expandir la cartera hipotecaria e incrementar las fuentes de fondeo de las entidades financieras de «leasing» y «factoring».

Promover la banca digital —con acompañamiento y recursos— también es un camino para profundizar la inclusión financiera. Una oportunidad latente es la existencia de un sector «fintech» en ascenso. Además, se cuenta con un mercado de capitales bien desarrollado y un marco regulatorio que facilita apoyarse en él para fomentar el desarrollo de tecnologías financieras.



AGRONEGOCIOS: TECNOLOGÍA Y RESILIENCIA

Mejorar los encadenamientos productivos, con pequeños y medianos agricultores, requiere de procesos inclusivos que conecten empresas exportadoras con proveedores y productores de forma transparente. En esto son útiles las plataformas de compra y venta en línea, en donde todos los actores de un sector comercializan sus productos e insumos. Se debe alentar la participación de empresas privadas en la provisión de este tipo de servicios.

Mantener el liderazgo de Chile en producción sostenible para mercados exigentes es factible con nuevas tecnologías. Por ejemplo, los sensores, imágenes satelitales y drones hoy permiten incrementar la eficiencia en el riego tecnificado y reducen costos de producción.

**Incentivar la promoción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes (incluyendo soluciones basadas en la naturaleza) estimularía la creación de empleo, la productividad y mejoraría la resiliencia ante impactos climáticos.*

***En paralelo, desarrollar servicios agroturísticos generaría ingresos alternativos frente a la posibilidad de que algunas unidades productivas dejen de ser rentables (teniendo en cuenta que el mercado es cada vez más competitivo).*



TURISMO: AMBICIOSO, SOSTENIBLE Y DIGITAL

Aumentar la competitividad del sector turístico significa adaptarse a nuevas tendencias, al cambio climático y a las crisis económicas que impactan el número de viajeros. Deben desarrollarse nuevos productos y destinos, además de incentivos para la inversión y para mejorar la infraestructura. Un impuesto ambiental fomentaría la conservación y restauración de ecosistemas.

Apoyarse en el nuevo contexto de transformación tecnológica serviría para gestionar cambios profundos tras la pandemia. La inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, las redes 5G, el «blockchain» y el llamado «internet de las cosas» son algunas de las herramientas que pueden utilizarse.

**La inteligencia artificial facilita campañas segmentadas para reactivar mercados con mayor potencial. Los sensores y el internet de las cosas permiten monitorear flujos turísticos y cambios medioambientales.*

Adecuar los marcos regulatorios y estructuras de gobernanza frente a los intensos cambios tecnológicos protegería a la industria frente a eventuales asimetrías o conflictos. Por ejemplo, las plataformas colaborativas pueden ampliar la oferta de servicios e incrementar los ingresos del sector, pero también motivar la expulsión de poblaciones locales de áreas turísticas.



TRANSICIÓN ENERGÉTICA, UN DEBER Y UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Atraer inversión extranjera hacia industrias emergentes como la del hidrógeno verde es posible con un programa que articule a ministerios sectoriales, InvestChile y otras agencias del Estado.

Promover la producción de hidrógeno verde, con miras a venderlo en el mercado global, requiere de un grupo del máximo nivel, capaz de movilizar políticas y acciones. Se trata de funcionarios con alta especialización y presencia activa en entidades clave, desde los ministerios de Energía, Hacienda y Bienes Nacionales, hasta CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), InvestChile y ProChile.

Fomentar programas masivos de formación de especialistas y técnicos permitiría cubrir el déficit de capital humano en estas industrias emergentes. Podrían traerse expertos de otros países o llevar personal chileno a centros en el exterior. Hay que aumentar el personal operativo debidamente entrenado.

Buscar iniciativas energéticas e inversionistas interesados en ellas —actores nacionales e internacionales, privados, públicos y hasta otros gobiernos— permitiría identificar una cartera de proyectos. La Empresa Nacional de Petróleo podría tener el mandato de formular proyectos de exportación —en solitario o con socios—, planteando productos y mercados atractivos.

Diseñar herramientas de política para compartir costos y riesgos tecnológicos y de mercado facilitaría la realización de nuevos proyectos energéticos. Así se incentivaría a inversionistas, considerando instrumentos como el crédito directo, «blended finance», inversión en «equity», financiamiento de largo plazo e inversión accionaria pública (que requiere modificaciones legales).

Evaluar el impuesto al carbono en frontera (CBT, por sus siglas en inglés) permitiría avanzar en la reconversión energética verde en industrias exportadoras de gran escala. Por ser una iniciativa de la Unión Europea, se sugiere emprender un diálogo diplomático con ese bloque de países para determinar la factibilidad y plazos esperados de aplicación.



LA INFRAESTRUCTURA ES EL MEDIO, PRODUCIR ES EL FIN

Construir la economía del mañana demanda trabajar por la conectividad de los sectores productivos tradicionales y los que se proyectan hacia adelante. Mejorar los sistemas de transporte de carga es uno de varios desafíos para alcanzar el objetivo último, que es la conquista de los mercados globales.



PRIORIZACIÓN DE OBRAS

Aumentar la red de caminos pavimentados y fomentar el modo ferroviario fortalecería y diversificaría la oferta de servicios de infraestructura de carga. La pavimentación de rutas, en particular, mejoraría en el corto plazo el desempeño de las cadenas logísticas.

**Se sugiere revisar las estructuras tarifarias en las rutas concesionadas, sin afectar su sostenibilidad financiera.*

Profundizar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad —que plantea una importante inversión hasta el año 2050— habilitaría rutas para conectar centros en donde se prevé un aumento de la producción. Dicho plan también impulsaría la infraestructura ferroviaria —con énfasis en conexiones productivas—, el desarrollo de terminales aéreas y una nueva infraestructura portuaria, con la participación del sector privado.

Mejorar significativamente la conectividad de los puertos con el interior del país es fundamental para potenciar el comercio marítimo. Para ello es clave acelerar la ejecución de soluciones ya identificadas y hacer las inversiones que han sido señaladas como prioritarias para cada puerto.

Implementar planes de infraestructura de transporte resiliente contribuiría a proteger activos críticos para el país. Los estudios del Ministerio de Medio Ambiente, para identificar riesgos ambientales en distintas regiones, deben articularse con la infraestructura priorizada. Es importante darles prelación a obras viales y portuarias que son vulnerables a eventos climáticos y, además, fundamentales para el desarrollo de las principales actividades económicas.



VENDERLE AL MERCADO GLOBAL

Construir sobre el liderazgo de Chile en materia de integración regional es posible si se mantienen los esfuerzos para robustecer la Alianza del Pacífico y se trabaja en armonizar los acuerdos comerciales entre ese grupo y MERCOSUR. También sería útil avanzar en cooperación horizontal a través de PROSUR (el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur) en asuntos de integración física, energía, salud y gestión de riesgo de desastres.

Fortalecer los sistemas de información de puertos y aeropuertos, así como la ventanilla única de comercio exterior (SICEX), favorecería la interconectividad de este tipo de herramientas de facilitación. Así mismo, con mejor integración fronteriza se reducirían tiempos y costos, sobre todo por la interoperabilidad entre instituciones nacionales y regionales.

Profundizar el desarrollo del Sistema Unificado de Permisos (SUPER) facilitaría y atraería inversiones. Debe contemplarse una ventanilla única que registre, monitoree y haga seguimiento a inversiones. También es recomendable una agenda de coherencia regulatoria que ofrezca seguridad a los inversionistas.

**El SUPER es una plataforma digital y centralizada en donde las empresas pueden tramitar y hacer seguimiento de todos los permisos sectoriales que requiere un proyecto, en diferentes etapas y ante distintas entidades estatales.*



MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Siempre hay espacio para un Estado más eficiente. Chile tiene un camino ganado y nuevos desafíos por superar en cuanto a gobernanza, empoderamiento de gobiernos locales y un ambiente normativo que facilite la actividad privada.



GESTIÓN ARTICULADA Y EFICAZ

Fortalecer el «centro de Gobierno» —los actores que prestan apoyo directo al jefe del Ejecutivo para el cumplimiento de sus metas— contribuiría a la gobernanza. Aprovechar las nuevas tecnologías, como la analítica de datos para procesar y analizar información de desempeño en tiempo real, alentaría la toma de decisiones estratégicas con evidencia oportuna y de calidad.

Crear una instancia enfocada en mejorar los servicios al ciudadano, de carácter técnico y con respaldo político, ayudaría a la gestión pública. Esta instancia se encargaría de articular esfuerzos y analizar la arquitectura actual para implementar mejoras. Pueden usarse como referentes otras instituciones responsables de misiones estratégicas, como el Servicio Civil y ChileCompra.

Enfatizar en modelos de gobernanza colaborativa favorecería soluciones consensuadas entre instituciones, más relevantes y efectivas. Las agencias públicas se convertirían en facilitadoras de arreglos institucionales que involucren al sector privado, a la sociedad civil, la academia y los ciudadanos en la planeación, implementación y monitoreo de políticas públicas.

Apoyarse en el concepto de «análisis de impacto del negocio» (BIA, por sus siglas en inglés), que permite identificar los procesos más críticos del Estado, ayudaría a definir planes y estrategias que garanticen la continuidad de las operaciones. Se trata de evaluar sistemas, trámites y servicios para determinar su nivel de criticidad y los recursos que se requieren frente a una eventual interrupción de las actividades (capital humano, instalaciones físicas, soporte tecnológico, información y proveedores de bienes y servicios).



DESCENTRALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DECISIONES

Utilizar herramientas para una mayor descentralización fiscal es posible, con el fin de promover alternativas de financiación para las áreas metropolitanas.

Esto aportaría a reducir la desigualdad urbana y la desigualdad estructural que afecta a municipios de una misma área.

**En general, es recomendable diseñar mecanismos de financiación que den estabilidad presupuestaria a los gobiernos regionales, independiente de las transferencias del nivel central, como se planteó en el anteproyecto de ley de rentas regionales.*

Desarrollar estrategias de recuperación de plusvalías —las inversiones que hace el sector público en las ciudades y que aumentan el valor de los bienes inmuebles— otorgaría recursos adicionales a los gobiernos locales.

Implementar un piloto de gestión urbana integral en áreas metropolitanas serviría para fortalecer la gobernanza de estas administraciones y mejorar sus indicadores. Podría desarrollarse un plan concreto de fortalecimiento de capacidades, teniendo en cuenta las particularidades de cada ciudad.

Descentralizar la promoción de exportaciones e inversiones fortalecería la capacidad de cada territorio de fomentar sus intereses y potencialidades. Sería un trabajo articulado entre los gobiernos regionales y entidades como ProChile, InvestChile y la Corporación de Fomento de la Producción. Es una iniciativa que podría liderar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, adscrita al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



ENTORNO NORMATIVO

Robustecer la política regulatoria —con foco en mipymes, protección del consumidor, economía digital y cooperación internacional— contribuiría a la competitividad y a un ambiente empresarial más inclusivo. Se requiere ampliar el uso del «análisis de impacto regulatorio» (RIA, por sus siglas en inglés) y de las consultas públicas (la participación ciudadana en la elaboración de normas).

Constituir un órgano de supervisión y coordinación regulatoria, que promueva la simplificación y calidad de los procesos normativos, ayudaría a consolidar la política de Chile en esta materia. Velaría por la correcta ejecución de los RIA y por la creación de un portal unificado de consultas públicas.

**Esto lo recomendó la OCDE, en su [estudio sobre política regulatoria de 2016](#).*



Bajo LA LUPA

DIGITALIZACIÓN

Las nuevas tecnologías pueden ser un motor de la economía y del progreso de los ciudadanos, especialmente de los menos favorecidos. Internet de alta velocidad e infraestructura digital segura son dos de las tareas en las que se debe profundizar.



**Líderes en la región,
aunque hay espacio
para mejorar**




33
Posición que ocupa Chile,
entre 141 países, en el Índice
de Competitividad Digital 2019

75%
de penetración
de banda ancha




11%
de las empresas
emplean
especialistas TIC



21% en países de la OCDE

80%
de los chilenos
acceden a Internet



86,4% usan internet
para obtener información
en buscadores

47,2% para adquirir
bienes y servicios

30,3% para actividades
educativas

34,4% para trámites
en línea



85%
de los trámites **son**
digitales en el Estado

615
instituciones públicas
tienen integrado el
sistema de «clave única»



CONECTIVIDAD: RÁPIDA, CONFIABLE Y AL SERVICIO DE LA GENTE

Incrementar la velocidad de las conexiones de internet es un propósito que se debe alcanzar acudiendo a distintos mecanismos, como licitaciones de espectro, acuerdos con entidades satelitales internacionales y coinversión en nuevos cables submarinos de fibra óptica.

Desarrollar regulaciones más garantistas que protejan la identidad digital de las personas incentivaría el uso de las diferentes plataformas y servicios, tanto privados como públicos. Definir una política de datos holística permitiría la explotación estadística de la información, con transparencia y cuidado ético. La Política Nacional de Inteligencia Artificial optimizaría el uso de estos datos.

**Es importante profundizar soluciones transversales como ClaveÚnica, la pasarela de autenticación y firma electrónica para el uso de los servicios digitales que ofrece el Estado. Otros servicios por desarrollar son el expediente electrónico y el buzón de notificaciones del Estado a ciudadanos.*

Implementar la Ley de Transformación Digital del Estado contribuiría a mejorar la calidad de las instituciones, en especial a nivel municipal, con miras a habilitar una sociedad más productiva e inclusiva. En paralelo, deben disminuirse los riesgos asociados a la pérdida de puestos de trabajo por fenómenos como, por ejemplo, la automatización de procesos.

Ejecutar un componente específico de inclusión social, en desarrollo de la Ley de Transformación Digital, permitiría que los más desfavorecidos se beneficien de las nuevas tecnologías. Debe darse acceso público a computadoras y dispositivos, para que cualquier ciudadano haga consultas y trámites. Es importante, a la vez, promover que la población adquiera habilidades digitales, para el uso efectivo de estos servicios. Podrían crearse portales formativos, de manera que la gente aprenda a través de videos y simuladores.

**También es clave elevar las capacidades digitales de los municipios, promoviendo herramientas tecnológicas compartidas y habilitando espacios para socializar experiencias de desarrollo digital en las municipalidades.*



Crear cargos para la gobernanza digital en las distintas entidades del Estado ayudaría a fomentar esta transformación tecnológica. Se trata de posiciones como la de «Chief Information Officer», «Chief Data Officer», «Chief Information Security Officer» o «Chief Digital Information Officer». En general, los departamentos responsables de estos temas tienen el deber de ser centros de excelencia que, a través de la tecnología, entreguen valor a la ciudadanía.

**Es necesario desarrollar políticas de servicio civil para fortalecer la captación y retención de talento que impulse esta transformación digital. También urge generar capacidades en la fuerza laboral para el uso de nuevas tecnologías.*



CIBERSEGURIDAD

Establecer la base normativa estructural del sistema de ciberseguridad del país implica tramitar en el Congreso iniciativas legales que, entre otras medidas, creen la primera Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile.

Diseñar y poner en práctica un plan de protección cibernética de infraestructura crítica es fundamental para la seguridad del Estado. Es recomendable establecer CSIRT sectoriales (equipos de respuesta ante incidentes de seguridad informática) en áreas clave como la financiera, energética, de salud, transporte y agua. Debe definirse un marco de gobernanza, incluyendo roles y responsabilidades.

**En el corto plazo pueden fortalecerse órganos de ciberseguridad existentes, como el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) y el CSIRT nacional.*

REFERENCIAS



Acuña, D. (2021) Economía circular: un camino para la sustentabilidad agrícola. Ministerio de Agricultura, Santiago de Chile. [VER AQUÍ](#).

Banco Mundial (2021a) Future foodscapes: re-imagining in Latin America and the Caribbean. [VER AQUÍ](#).

Banco Mundial (2021b) América Latina y el Caribe: panorama general 2021. [VER AQUÍ](#).

BID (2021a) Marco sectorial de protección social. Draft no publicado. División de Protección Social y Salud. Washington D.C. Mayo. [VER AQUÍ](#).

BID (2021b) Congestión urbana en América Latina y el Caribe: Características, costos y mitigación. [VER AQUÍ](#).

BID (2021c) Water in the time of drought II. Lessons from drought around the world. [VER AQUÍ](#).

BID (2021d) Affordability of Water and Sanitation Services in Latin America: A comparative approach – Draft. [VER AQUÍ](#).

BID/OEA (2020) Ciberseguridad: Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe. [VER AQUÍ](#).

Bustelo, M., Suaya, A. y Veza, E. (2021) Hacia una nueva realidad laboral para las mujeres: Soluciones para recuperar el empleo femenino en ALC. BID, División de Género y Diversidad. Nota técnica N° IDB-TN-02235. [VER AQUÍ](#).

Fernández, C. (2019) Transición hídrica. El futuro del agua en Chile. [VER AQUÍ](#).

FMI (2021) Chile: 2021 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Chile. Country Report No. 2021/083. [VER AQUÍ](#).

Fuentes, J. R., Schmidt-Hebbel, K. y Soto, R. (2021) Fiscal Rule and Public Investment in Chile (Documento de Trabajo N° IDB-WP-1189) BID: Departamento de Investigación y Economista jefe. [VER AQUÍ](#).

Gallardo, F., Monforti, A., (2020) A Techno-Economic Analysis of on-grid solar hydrogen production by electrolysis in the north of Chile and the case of exportation from Atacama Desert to Japan. International Journal of Hydrogen Energy Manuscript Draft, Elsevier. [VER AQUÍ](#).

Gobierno de Chile (2017a) Informe de diagnóstico e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile. [VER AQUÍ](#).

Gobierno de Chile (2017b) Plan de Adaptación al cambio climático del sector salud. Ministerio de Salud. Ministerio del Medio Ambiente. [VER AQUÍ](#).

Gobierno de Chile (2017c) Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. [VER AQUÍ](#).



- Hernaiz, D., Medina, J. P., & Miller, S. J. (2022) Reforma fiscal para Chile: desafíos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas. [VER AQUÍ](#).
- InvestChile (2020) Microsoft announces its largest investment in Chile in 28 years: The company will install data centers in the country and implement a plan of digital reactivation. [VER AQUÍ](#).
- Keefer, P., & Scartascini, C. (2022). Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. [VER AQUÍ](#).
- Martínez del Ángel, M. y Mesquita Moreira M. (2019) A Note on Structural Change and Productivity Growth in Latin America. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. [VER AQUÍ](#).
- MDSF (2020) Informe final Consejo Asesor para la Cohesión Social: Diagnóstico para una aproximación a la Cohesión Social en Chile y recomendaciones para fortalecer el aporte de la política social. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. [VER AQUÍ](#).
- Muñoz, J. C., J. Barton, D. Frías, A. Godoy, W. Bustamante, S. Cortés, M. Munizaga, C. Rojas y E. Wagemann (2019) Ciudades y cambio climático en Chile: Recomendaciones desde la evidencia científica. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. [VER AQUÍ](#).
- OCDE (2019) Digital Government in Chile – A Strategy to Enable Digital Transformation. [VER AQUÍ](#).
- OCDE (2020a) Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: How can public policies make it happen? [VER AQUÍ](#).
- OCDE (2020b) Perspectivas económicas de América Latina 2020. [VER AQUÍ](#).
- Porrúa, M., Lafuente, M., Mosqueira, E., Roseth, B. y Reyes, A. M. (2021) Transformación digital y empleo público: El futuro del trabajo del Gobierno. BID, Washington DC. [VER AQUÍ](#).



Copyright © 2023 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>). Se deberá cumplir los términos y condiciones señalados en el enlace URL y otorgar el respectivo reconocimiento al BID.

En alcance a la sección 8 de la licencia indicada, cualquier mediación relacionada con disputas que surjan bajo esta licencia será llevada a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integral de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del BID, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.





Autor:

Sebastián Miller

Edición

Andrés Gómez Osorio

Diseño:

Sara María Ochoa Botero

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación tuvo en cuenta los importantes aportes de un grupo de personas que contribuyeron con su visión y observaciones puntuales. Por ello, gracias especiales a:

María Florencia Attademo-Hirt,

Gerente general del Departamento de Países del Cono Sur y representante del BID en Chile.

Agustina Schijman,

Economista líder de la Vicepresidencia de Países.

Virginia Quiejo,

Economista regional en el Departamento de Países del Cono Sur.

Gabriela Martínez,

Consultora de la representación en Chile

